

CG201/2008

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA OTRORA COALICIÓN “ALIANZA POR MÉXICO” EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Distrito Federal, a 23 de mayo de 2008.

VISTO para resolver el expediente identificado con el número JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006, al tenor de los siguientes:

R E S U L T A N D O S

I.- Con fecha veintidós de mayo de dos mil seis se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el oficio número 03JDE/ES/214/06, signado por el Vocal Ejecutivo del 03 Consejo Distrital de esta institución en el estado de Chihuahua, mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el entonces representante propietario de la otrora coalición “Alianza por México” ante dicho órgano desconcentrado, en el cual se denunciaron presuntas irregularidades atribuibles a quien resulte responsable, conculcatorias del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismas que hace consistir primordialmente en lo siguiente:

“HECHOS

I.- Dispone el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

II.- En estricto cumplimiento al artículo anterior, los candidatos registrados de la **ALIANZA POR MÉXICO**, entre otros el candidato a la Presidencia de la República Roberto Madrazo Pintado, y los candidatos a Senadores Fernando Baeza Meléndez y Lorenzo Miguel Lucero Palma, han realizado diversos actos de campaña en el Estado de Chihuahua y en particular en ésta Ciudad de Juárez Estado de Chihuahua; además de lo anterior han realizado propaganda electoral, en la cual proyectan su imagen a través de pendones, que fueron colocados en diversos sectores de la Ciudad, principalmente en postes, lo anterior con el propósito de difundir su imagen hacia el electorado.

III.- Así las cosas, hace ya algún tiempo se ha venido detectando por militantes y simpatizantes de la **ALIANZA POR MÉXICO**, que diversas cuadrillas de personas sin mediar el consentimiento de la coalición mencionada, se han apoderado de la mayoría de los pendones que fueron colocados en la Ciudad, los cuales llevan impresas las imágenes de Roberto Madrazo Pintado, Fernando Baeza Meléndez y Miguel Lucero Palma; siendo el caso que una vez que son retirados los pendones que contienen las imágenes en cita de inmediato son colocados los pendones de otros partidos políticos diferentes a la **ALIANZA POR MÉXICO**.

IV.- Dispone la legislación penal, que **"Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley"**.

Dados los hechos esbozados se colige, que al haberse apoderado de mas de 5,000 (Cinco mil pendones) personas que no son propietarias de los mismos, se ha actualizado el tipo penal en comento, ya que como se indicó líneas arriba, la **ALIANZA POR MÉXICO**, jamás otorgó su consentimiento a fin de que se dispusiese de los pendones.

V.- En virtud de lo anterior téngaseme en los términos del presente escrito **ELEVANDO MI MÁS ENÉRGICA PROTESTA Y FORMULANDO FORMAL DENUNCIA DE HECHOS**, solicitando se haga un fuerte llamado de atención y un extrañamiento a los partidos políticos y colaciones contendientes a fin de que sus actividades las realicen dentro del marco de la legalidad; **así mismo dese vista al Ministerio Público a efecto de que en caso de que considere que existe algún ilícito tipificado en el Código Penal Inicie las indagatorias pertinentes y en su caso ejercite la acción penal correspondiente."**

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

Cabe señalar que la quejosa no aportó ningún elemento de prueba, respecto de los hechos denunciados.

II. Por acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil seis, se tuvo por recibido el escrito señalado en el resultando anterior y con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, párrafo 1, incisos a) y t); 82, párrafo 1, incisos h); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 269; 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, párrafo 1, inciso a), fracción V; 12, párrafo 1; 16, 19, 21, 37, y 38 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se acordó que la denuncia presentada por la otrora coalición “Alianza por México” fuera tramitada como queja genérica, a la cual le recayó el número de expediente JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006; asimismo se requirió a la coalición quejosa para que aclara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, en particular que precisara los lugares de ubicación de la propaganda que presuntamente fue retirada y describiera detalladamente las características de la que fue colocada en dichos lugares, con el objeto de contar con los elementos necesarios para integrar el presente expediente.

III. Mediante oficios SJGE/1315/2006 y SJGE/1409/2006, ambos de fecha siete de septiembre de dos mil seis, suscritos por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo citado en el resultando anterior, se requirió a los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrantes de la otrora coalición “Alianza por México”, para que en el plazo concedido, aclararan las circunstancias precisadas en el resultando precedente, diligencia que fue practicada los días once y veintidós de septiembre del citado año, respectivamente.

IV. Mediante escrito presentado en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Federal Electoral el día catorce de septiembre de dos mil seis, suscrito por el C. Felipe Solís Acero, entonces representante propietario del Partido Revolucionario Institucional integrante de la otrora coalición “Alianza por México” ante el Consejo General de esta institución, dio contestación al requerimiento realizado por esta autoridad, en los siguientes términos:

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

"...Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 14, 16 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, 36, párrafo 1 inciso b); 86 párrafo 1, inciso l); 87; 89, párrafo 1, incisos n) y u), 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 24 del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vengo a realizar manifestaciones en cumplimiento al requerimiento que nos fue notificado mediante el acuerdo emitido dentro del expediente identificado con el número JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006, del 29 de mayo de 2006, el cual fue notificado el día 11 de los corrientes, mediante oficio SJGE/1315/2006, en el que se nos solicita:

"...aclare las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos señalados que denuncia, en particular que precise los lugares de ubicación de la propaganda que presuntamente fue retirada y describa detalladamente las características de la que fue colocada en dichos lugares..."

Al respecto, me permito realizar los siguientes señalamientos:

*PRIMERO.- Que por lo que hace a las circunstancias de "modo", las mismas se encuentran plenamente acreditadas en el escrito de Queja, presentado por el **C. HÉCTOR ARCELUS PÉREZ**, representante de la Coalición "Alianza por México" ante el Consejo Distrital Electoral 03, en el estado de Chihuahua, toda vez que este se hace consistir en la conducta ilegal que diversos militantes tanto del Partido Acción Nacional como de la Alianza "Por el Bien de Todos" llevaron a cabo el retiro de Propaganda electoral de los candidatos postulados por mi representada a los cargos de Presidente de la República y al Senado de la República, colocando pendones y propaganda electoral del partido y coalición denunciados, en los lugares que se encontraba colocada la propaganda electoral de mi representada.*

***SEGUNDO.-** Por lo que hace a la circunstancia de "tiempo", la misma se da desde el día 25 de abril hasta el día previo a la celebración de la jornada electoral, es decir, es tratándose en su momento de hechos de "tracto sucesivo", en consecuencia los actos denunciados no podían circunscribirse, a un día o período determinado, ya que los mismos continuaban realizándose, circunstancia que permite acreditar la violación que a la normatividad*

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

electoral realizan los militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional y la Coalición "Por el Bien de Todos" que a través de la promoción ilegal de sus candidatos devino en una violación a la normatividad electoral.

TERCERO.- *Así mismo, lo relativo a la circunstancia de "lugar" , se hace el señalamiento respectivo a que los actos denunciados acontecieron, en las principales vialidades que se encuentran dentro de la demarcación del Distrito Electoral 03, con cabecera, en el municipio de Ciudad Juárez Estado de Chihuahua, entre otras, la Avenida Ejército Nacional, Avenida de la Raza, Avenida Adolfo López Mateos, Avenida Paseo Triunfo de la República y Avenida Plutarco Elías Calles, es decir, a todo lo largo de estas avenidas.*

Es importante señalar que la propaganda denunciada se encuentra ubicada en áreas del equipamiento urbano como son puentes, postes de energía eléctrica, postes telefónicos y semáforos; lo cual hace que los pendones y propaganda que se fijaron la autoridad electoral distrital no tenga el control en el número y los lugares como lo pudiese ser aquella propaganda colocada en los lugares de uso común.

CUARTO.- *Se hace necesario resaltar que el hecho denunciado, constituye a todas luces un acto contrario al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por la cual independientemente del cumplimiento al requerimiento, esta autoridad en concordancia a las facultades que como autoridad investigadora tiene, debió haber procedido a realizar las diligencias necesarias que permitan verificar que los hechos denunciados se están llevando a cabo, lo anterior en atención a la solicitud que mi representado realizó en su escrito de queja a través de la inspección ocular en las avenidas y calles señaladas, mismas que son parte integrante de la demarcación territorial del distrito 03, y en consecuencia, proceder al retiro de la propaganda señalada a fin de garantizar el cumplimiento de los principios rectores del proceso electoral.*

Se pone de relieve lo señalado en el párrafo que antecede toda vez que, resulta imperioso para nuestra Coalición que este Instituto Federal Electoral proceda a llevar a cabo de manera exhaustiva las funciones que tiene conferidas y de las cuales se le solicita su ejercicio, pero además que también proceda a proporcionar un trato igualitario, congruente y certero a los trámites que otorgue en el desahogo de los expedientes incoados ante su competencia, ello se

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

afirma ya que al efectuar una consulta a los autos de los expedientes JGE/QAPM/JD04/BC/016/2006 y JGE/QAPM/JD04/BC/017/2006, se advierte que en los mismos, esta autoridad con el objeto de confirmar la falta, ordenó la práctica de diligencias aún y cuando no se le requirió o se estimasen necesarias; de ahí que cobre vigencia la necesidad de que se proceda de forma inmediata a realizar los trámites de ley para perfeccionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y no apercibir a mi representada en el sentido de que desechará nuestras quejas, dado que en la especie se proporcionaron diversos datos y elementos de hecho y derecho que perfectamente permiten la práctica de diligencias que robustezcan la veracidad de lo denunciado y no eludir una responsabilidad que por ley debe ejercitarse...”

V. Mediante acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis, se tuvo por recibido el escrito señalado en el resultando precedente; asimismo para mejor proveer, se ordenó girar atento oficio al Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital de esta institución en el estado de Chihuahua, a efecto de que se constituyera en los domicilios a que hizo alusión el quejoso en su escrito de aclaración de denuncia e investigara si existió la propaganda electoral de la otrora coalición “Alianza por México” que es motivo de la tramitación del expediente señalado al epígrafe, y ordenó emplazar a los Partidos del Trabajo, Convergencia y de la Revolución Democrática integrantes de la coalición “Por el Bien de Todos”, así como al Partido Acción Nacional.

VI. Lo ordenado en el párrafo anterior fue notificado al órgano desconcentrado de referencia mediante el oficio SJGE/1503/2006 de fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis.

VII. Mediante los oficios números SJGE/1495/2006, SJGE/1496/2006 y SJGE/1497/2006, todos de fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis, suscritos por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fecha veintidós de septiembre del mismo año, se notificó a los partidos integrantes de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, y al Partido Acción Nacional mediante oficio SJGE/1498/2006 de la misma fecha señalada anteriormente e igualmente la fecha de notificación, el emplazamiento formulado por esta autoridad mediante el acuerdo citado en el resultando V.

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

VIII. Mediante escrito presentado en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Federal Electoral el día veintisiete de septiembre de dos mil seis y suscrito por la C. Sara Isabel Castellanos Cortés, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la otrora coalición "Alianza por México" ante el Consejo General de esta institución, dio contestación al requerimiento realizado por esta autoridad, en los siguientes términos:

"...Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 14, 16 y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, 36, párrafo 1 inciso b); 86 párrafo 1, inciso I); 87; 89, párrafo 1, incisos n) y u), 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 24 del Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vengo a realizar manifestaciones en cumplimiento al requerimiento que nos fue notificado mediante el acuerdo emitido dentro del expediente identificado con el número JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006, del 29 de mayo de 2006, el cual fue notificado el día 22 de los corrientes, mediante oficio SJGE/1409/2006, en el que se nos solicita:

"... aclare las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos señalados que denuncia, en particular que precise los lugares de ubicación de la propaganda que presuntamente fue retirada y describa detalladamente las características de la que fue colocada en dichos lugares..."

Al respecto, me permito realizar los siguientes señalamientos:

PRIMERO.- *Que por lo que hace a las circunstancias de "modo", las mismas se encuentran plenamente acreditadas en el escrito de Queja, presentado por el C. **HÉCTOR ARCELUS PÉREZ**, representante de la Coalición "Alianza por México" ante el Consejo Distrital Electoral 03, en el estado de Chihuahua, toda vez que este se hace consistir en la conducta ilegal que diversos militantes tanto del Partido Acción Nacional como de la Alianza "Por el Bien de Todos" llevaron a cabo el retiro de Propaganda electoral de los candidatos postuladas por mi representada a los cargos de Presidente de la República y al Senado de la República, colocando pendones y propaganda electoral del partido y coalición denunciados, en los lugares que se encontraba colocada la propaganda electoral de mi representada.*

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

SEGUNDO.- *Por lo que establece a la circunstancia de "tiempo", manifestada esta situación se da desde el día 25 de abril hasta el día previo a la celebración de la jornada electoral, y en tales circunstancias estamos en presencia de hechos de "tracto sucesivo", lo cual establece que la denuncia de estos hechos no puede establecerse únicamente en días específicos, ya que los mismos continuaban realizándose durante el lapso de tiempo manifestado, circunstancia que permite acreditar en forma reiterada la violación que a la normatividad electoral realizan los militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional y la Coalición "Por el Bien de Todos" que a través de la promoción ilegal de sus candidatos y de esta manera realizando una violación a la normatividad electoral.*

TERCERO.- *En cuanto, lo relativo a la circunstancia de "lugar", se hace el señalamiento respectivo a que los actos denunciados acontecieron, en las principales vialidades que se encuentran dentro de la demarcación del Distrito Electoral 03, con cabecera, en el municipio de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, entre otras, la Avenida Ejército Nacional, Avenida de la Raza, Avenida Adolfo López Mateos, Avenida Paseo Triunfo de la República y Avenida Plutarco Elías Calles, es decir, a todo lo largo de estas avenidas.*

Es importante señalar que la propaganda denunciada se encuentra ubicada en áreas del equipamiento urbano como son puentes, postes de energía eléctrica, postes telefónicos y semáforos; lo cual hace que los pendones y propaganda que se fijaron la autoridad electoral distrital no tenga el control en el número y los lugares como lo pudiese ser aquella propaganda colocada en los lugares de uso común.

CUARTO.- *Se hace necesario resaltar que el hecho denunciado, constituye a todas luces un acto contrario al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por la cual independientemente del cumplimiento al requerimiento que se esta realizando, esta autoridad y de conformidad con las atribuciones con que cuenta debió investigar tales hechos, realizando las diligencias necesarias para poder determinar que las de los hechos narrados se están realizando, lo anterior en atención a la solicitud que mi representado realizó en su escrito de queja a través de la inspección ocular en las avenidas y calles señaladas, mismas que son parte integrante de la demarcación territorial del distrito 03, y en consecuencia, proceder al retiro de la propaganda señalada a fin de*

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

garantizar el cumplimiento de los principios rectores del proceso electoral.

*Toma gran importancia lo anteriormente manifestado, ya que resulta necesario para nuestra Coalición que este Instituto Federal Electoral proceda a llevar a cabo de manera **exhaustiva** las atribuciones y por ende funciones que tiene conferidas y de las cuales se solicita haga uso pleno de las mismas, y con ello se pueda establecer un trato igualitario, congruente y certero a los trámites que otorgue en el desahogo de los expedientes incoados ante su competencia, ello se afirma ya que al efectuar una consulta a los autos de los expedientes JGE/QAPM/JD04/BC/016/2006 y JGE/QAPM/JD04/BC/017/2006, se advierte que en los mismos, esta autoridad con el objeto de confirmar la falta, ordenó la práctica de diligencias aún y cuando no se le requirió o se estimasen necesarias; de ahí que cobre vigencia la necesidad de que se proceda de forma inmediata a realizar los trámites de ley para perfeccionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y no apercibir a mi representada en el sentido de que desechará nuestras quejas, dado que en la especie se proporcionaron diversos datos y elementos de hecho y derecho que perfectamente permiten la práctica de diligencias que robustezcan la veracidad de lo denunciado y no eludir una responsabilidad que por ley debe ejercitarse...”*

IX. Mediante escrito presentado en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Federal Electoral el día veintiocho de septiembre de dos mil seis y suscrito por el entonces representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de esta institución, dio contestación al emplazamiento realizado por esta autoridad, en los siguientes términos:

“...Que por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma, con fundamento en el párrafo 2 del artículo 270 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vengo a producir mi contestación respecto de las temerarias e infundadas imputaciones formuladas ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el C. Felipe Solís Acero, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, haciéndolo en los siguientes términos:

I.- Por lo que hace a la manifestación vertida por el C. Felipe Solís Acero en el primer señalamiento de su escrito de fecha 22 de junio de 2006, en el sentido de que queda debidamente acreditada la

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

circunstancia de modo en el escrito de queja interpuesto por el C. Héctor Arcelús Pérez, representante de la coalición Alianza por México ante la Junta Distrital 03, esta afirmación deviene carente de veracidad, puesto que en su escrito de queja, la referida persona jamás precisa que hayan sido militantes de mi representado quienes quitaron o retiraron la propaganda electoral de la referida coalición; aún más, jamás refiere que dichos individuos portaran o vistieran indumentaria con logotipos o algún otro distintivo que le permitiera relacionarlos con tal o cual partido o coalición política; en este sentido, se puede concluir válidamente que las circunstancias de modo no fueron debidamente acreditadas en el presente procedimiento.

II.- Por lo que hace a la manifestación vertida por el C. Felipe Solís Acero en el segundo señalamiento de su escrito de fecha 22 de junio de 2006, en el sentido de que está debidamente acreditada la circunstancia de tiempo con la simple manifestación que desde el día 25 de abril hasta el día previo a la celebración de la jornada electoral, militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional promovieron de manera ilegal a sus candidatos en franca violación a la normatividad electoral; en la especie, si bien es cierto que el C. Arcelús Pérez, en el punto III de su escrito de queja manifiesta textualmente que "se ha venido detectando por militantes y simpatizantes de la Alianza por México que diversas cuadrillas de personas sin mediar el consentimiento de la coalición mencionada, se han apoderado de la mayoría de los pendones que fueron colocados en la ciudad", también lo es que en ninguna parte de su aseveración proporciona los elementos necesarios para identificar a dichas cuadrillas de personas como simpatizantes o militantes de mi representado. Aunado a lo anterior, es de explorado derecho que para efecto de acreditar fehacientemente la circunstancia de tiempo, es necesario aportar el día y la hora en que ocurren los hechos, lo cual no sucede en la especie y en consecuencia, no se acredita la circunstancia de tiempo, pues el promovente representante del Partido Revolucionario Institucional, de una manera vaga e imprecisa, pretende imputarle a mi representado estos eventos.

III.- Por lo que hace a la manifestación vertida por el C. Felipe Salís Acero en el tercer señalamiento de su escrito de fecha 22 de junio de 2006, en el sentido de que se encuentra debidamente acreditada la circunstancia de lugar con la simple manifestación de que los hechos acontecieron en las principales vialidades de la circunscripción territorial del Distrito Electoral 03 con cabecera en el

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

municipio de Juárez, nuevamente deviene falso, ya que para efecto de tener por acreditada dicha circunstancia, es necesario se aporten elementos precisos que permitan tener la certeza de la colocación de la propaganda electoral de su partido en las vialidades que señala, así como de las personas que refiere retiraron dicha propaganda, así como la posterior falta de la misma, pues en la especie se pudiera llegar al extremo de que haya sido personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales quienes la retiraron, en virtud de obstruir los señalamientos viales que sobre dichas arterias se encuentran colocados; lo anterior en razón de que como lo manifiesto con anterioridad, las personas relacionadas con estos hechos no portaban ningún elemento que los pudiera identificar o vincular con mi representado.

En mérito de lo expuesto, es de concluirse que lo señalado por los CC. Héctor Arcelús Pérez y Felipe Salís Acero en sus diversos escritos, devienen en simples manifestaciones carentes de sustento jurídico, toda vez que son omisos en aportar los medios de convicción necesarios para tener por acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión de las irregularidades que señalan, razón por la cual deberá decretarse la improcedencia de la referida queja...”

X. Mediante escrito presentado en la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Federal Electoral el día veintinueve de septiembre de dos mil seis y suscrito por el entonces representante común de los partidos políticos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, dio contestación al emplazamiento realizado por esta autoridad, en los siguientes términos:

“...Que por medio del presente escrito, encontrándome en tiempo y forma, y con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 párrafo I incisos a) y b), 270 párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, I, 2, 3, 5, 14 del Reglamento del Consejo General para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por los numerales 1, 2, 3, 4, 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la sustanciación de los procedimientos de las Faltas Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; vengo a presentar---

-----CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO-----

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

del procedimiento previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al cual se le ha asignado el número de expediente que se señala al rubro.

HECHOS

*Con fecha veintidós de septiembre de dos mil seis, fue notificado el Partido de la Revolución Democrática de la existencia de un procedimiento administrativo incoado por el C. Héctor Arcelús Pérez, representante propietario de la coalición **Alianza por México** ante el 03 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el estado de Chihuahua, por un presunto incumplimiento de las obligaciones en que podría haber incurrido la coalición **Por el Bien de Todos**.*

Con misma fecha, el Instituto emplazó a la coalición en cita conforme a lo dispuesto por el artículo 270, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, otorgándole un término de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación, para que contestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes. Procedo a dar respuesta al emplazamiento conforme a lo siguiente:

CONTESTACION AL EMPLAZAMIENTO

*En el procedimiento administrativo sancionador que se contesta, con motivo del escrito de queja se desprende que la coalición **Alianza por México** se duele fundamentalmente de lo siguiente:*

“...hace ya algún tiempo se ha venido detectando por militantes y simpatizantes de la Alianza por México, que diversas cuadrillas de personas sin mediar el consentimiento de la Coalición mencionada, se han apoderado de la mayoría de los pendones que fueron colocados en la Ciudad, los cuales llevan impresas las imágenes de Roberto Madrazo Pintado, Fernando Baeza Meléndez y Miguel Lucero Palma; siendo el caso que una vez que son retirados los pendones que contienen las imágenes en cita de inmediato son colocados los pendones de otros partidos políticos diferentes a la Alianza por México...”

Es menester señalar desde este momento que en el escrito de queja que se contesta no se señala el presupuesto legal que el quejoso pretende afirmar se ha violado, ni en el escrito por el que el inconforme desahogo el requerimiento efectuado por la autoridad

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

administrativa electoral de fecha veintinueve de mayo del año en curso.

*Una vez señalado lo anterior, y sin saber con claridad que precepto es el que supuestamente la coalición **Por el Bien de Todos** ha vulnerado, procedo a afirmar que las pretensiones del quejoso son infundadas, por lo siguiente:*

*En el escrito de queja incoado por el representante propietario de **Alianza por México** ante el 03 Distrito en Chihuahua, el quejoso hace referencia a una supuesta cuadrilla de personas que se han dado a la tarea de “**apoderarse**” de pendones con propaganda electoral de la coalición señalada al inicio del presente párrafo, y continua señalando que en su lugar son colocados pendones de otros partidos políticos, afirmando que los pendones que han sido robados son más de 5,000.*

Por cuanto al escrito de fecha veintidós de junio del año que corre, mediante el cual el quejoso atiende el requerimiento efectuado por esta autoridad, manifiesta:

“... toda vez que este se hace consistir en la conducta ilegal que diversos militantes tanto del Partido Acción Nacional como de la Alianza “Por el Bien de Todos” llevaron a cabo el retiro de Propaganda electoral de los candidatos postulados por mi representada ... colocando pendones y propaganda electoral del partido y coalición denunciados, en los lugares que se encontraba colocada la propaganda electoral de mi representada... por lo que hace a la circunstancia de “tiempo”, la misma se da desde el día 25 de abril hasta el día previo a la celebración de la jornada electoral... lo relativo a la circunstancia de “lugar”... acontecieron, en las principales vialidades que se encuentran dentro de la demarcación del Distrito Electoral 03, con cabecera, en el municipio de Ciudad Juárez Estado de Chihuahua, entre otras, la Avenida Ejército Nacional, avenida de la raza, Avenida Adolfo López Mateos, Avenida Paseo de la República y Avenida Plutarco Elías Calles.”

*En principio debe destacarse que **Alianza por México** se abstiene de presentar prueba alguna, considerando erróneamente que su dicho basta para acreditar la supuesta violación. Cuando ni siquiera de su escrito inicial de queja se desprende alguna afirmación en contra de la coalición **Por el Bien de Todos**, ni del desahogo del citado requerimiento. Ya que de la simple lectura de los párrafos anteriormente descritos, no es dable desprender conducta alguna que sea imputable a la coalición que se denuncia.*

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

*Es claro que la ausencia de pruebas no permite vincular a los supuestos hechos con la coalición **Por el Bien de Todos**, ya que de las constancias que obran en autos no se desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar; que permitan tener un conocimiento certero de la existencia de la supuesta irregularidad y, en su caso, veracidad de un hecho que pudiese constituir una falta.*

*Si bien es cierto **Alianza por México** desahogó el requerimiento en comento, del mismo no se desprende prueba alguna que permita a esta autoridad iniciar un procedimiento.*

*Lo anterior es así, toda vez que, el único elemento que existe en autos es la queja, y el desahogo del requerimiento que se ha mencionado en párrafos anteriores. Lo anterior no permite de ninguna manera que se pueda acreditar la presunta conducta irregular consistente en que la coalición **Por el Bien de Todos**, "robó" pendones pertenecientes a **Alianza por México**.*

No obstante lo dicho por el inconforme no encuentra sustento alguno, por las consideraciones siguientes:

Conforme a la doctrina procesal la naturaleza de la prueba es producir un estado de certidumbre en la mente de alguien respecto de la existencia o inexistencia de un hecho.

En este sentido, la ausencia de pruebas en un procedimiento no permite a ninguna autoridad llegar a una conclusión objetiva, pues no existen elementos que valorar y que permitan que el dicho del quejoso adquiera alguna trascendencia, o bien llegar a la verdad histórica de un hecho concreto.

En principio, por lo que se refiere a la ausencia de pruebas, en congruencia con lo señalado por el artículo 10 párrafo primero, inciso a) fracción VI, del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que refiere:

"1. La Queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación eléctricos o electrónicos.

a) La queja o denuncia presentada por escrito, deberá cumplir los siguientes requisitos:

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

VI. Ofrecer o aportar las pruebas o indicios con que se cuente...”

En relación con el artículo 21, párrafo 1 del citado Reglamento que textualmente dicta:

“1. Con el escrito de queja o denuncia se ofrecerán o aportarán las pruebas o indicios con que se cuente. Cuando la Junta considere que de la relación de hechos se desprenden indicios suficientes, admitirá la queja o denuncia y procederá a emplazar al denunciado y a iniciar la investigación correspondiente.”

*Es menester referir a esta autoridad que no obstante no existir prueba alguna que vinculara a la coalición **Por el Bien de Todos** esta autoridad administrativa electoral decidió dictar acuerdo por el que dio entrada la queja que se contesta, lo que claramente es un error, acorde a lo expuesto con anterioridad.*

*Es más, aún en el supuesto no concedido de que electivamente hayan sido robados los pendones de **Alianza por México**, no se acredita en forma alguna que dichos hechos hayan sido realizados por la coalición **Por el Bien Todos**.*

En ese orden de ideas, lo expresado por el quejoso no es más que una afirmación dogmática y subjetiva, que no encuentra soporte en ninguna prueba y que de ninguna forma sirve como sustento para afirmar ni un robo de pendones, ni mucho menos que la coalición que se denuncia haya llevado a cabo los presuntos hechos.

*Bajo ese tener, es claro que al no ofrecer, ni aportar elemento probatorio alguno que cree convicción de que el hecho motivo de la presente queja existe, y siendo principio general de derecho que **"quien afirma está obligado a probar"**, debe declararse infundada la queja que se contesta.*

En consecuencia, la carencia de elementos probatorios no permite acreditar la presunta violación aducida por el inconforme, pues, no solo debió de remitir pruebas idóneas a efecto de acreditar la veracidad del presunto hecho del cual se duele, sino que debió de haber enviado las pruebas aptas a efecto de acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que presuntamente, se dio la conducta irregular.

A hora bien, por cuanto al dicho del quejoso en el siguiente sentido:

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

“Se pone de relieve lo señalado en el párrafo que antecede toda vez que, resulta imperioso para nuestra Coalición que este Instituto Federal Electoral proceda a llevar a cabo de manera exhaustiva las funciones que tiene conferidas y de las cuales se le solicita su ejercicio, pero además que también proceda a proporcionar un trato igualitario, congruente y certero a los trámites que otorgue en el desahogo de los expedientes incoados ante su competencia, ello se afirma ya que al efectuar una consulta a los autos de los expedientes..., se advierte que en los mismos, esta autoridad con el objeto de confirmar la falta, ordenó la práctica de diligencias aún y cuando no se le requirió o se estimasen necesarias; de ahí que cobre vigencia la necesidad de que se proceda conforme a(sic) de forma inmediata a realizar los trámites de ley para perfeccionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y no apercibir a mi representada en el sentido de que se desechará nuestras quejas, dado que en la especie se proporcionaron diversos datos y elementos de hecho y derecho que perfectamente permiten la práctica de diligencias que robustezcan la veracidad de lo denunciado y no eludir una responsabilidad que por ley debe ejercitarse”.

Sobre el particular, la autoridad administrativa electoral debió de haber dado por satisfechos los requisitos mínimos mandados constitucionalmente que deben existir para el caso de incoar un procedimiento, mismos que atienden a un mandamiento constitucional, como señala el artículo 14 constitucional al referir que todo acto emanado de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, de lo contrario constituiría un acto de molestia a mí representada. Asimismo, para que la parte denunciada esté en posibilidades de ejercitar su derecho de defensa, debe ser emplazada con todas las constancias que obren en autos.

Dicho lo anterior es claro que no se actualiza violación alguna a la normatividad que nos rige a los partidos políticos nacionales y Coaliciones. Esto es así, ya que no obran en autos pruebas idóneas para sustentar el presunto hecho violatorio del código electoral y del acuerdo referido por la quejosa, por lo que es claro que se omite cumplir con lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, de aplicación en el presente caso en términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo 1, del reglamento en la materia.

*De tal manera que al no existir probanzas idóneas que acrediten el presunto hecho que se le atribuye a la coalición **Por el Bien de***

*Todos, no puede siquiera inferirse alguna posible responsabilidad de cualquiera de los órganos o integrantes de la Coalición, en la comisión de alguna conducta contraria al marco legal. Al no acompañarse una sola prueba que permitiera generar convicción respecto a la veracidad de las imputaciones realizadas en contra de dicha coalición, en términos de los argumentos de hecho y de derecho que hago valer en el cuerpo del presente recurso, solicito se declare infundada la queja instaurada por el inconforme en contra de la coalición **Por el Bien de Todos**, por así ser procedente en derecho.*

OBJECCIÓN A LAS PRUEBAS

*Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende darles en contra de la coalición **Por el Bien de Todos**, en razón de que las mismas no resultan ser los medios de prueba idóneos para probar su dicho y no están administradas con el hecho que considera le causa agravio. Aunado a lo anterior, es principio general de derecho que "quien afirma está obligado a probar", máxima recogida por el artículo 15 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.*

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas, por lo que al no haberlo hecho así el denunciante, no deben ser admitidas y por consiguiente tomadas en consideración dichas probanzas."

XI. Mediante el oficio identificado con el número 03JDE/574/2006, el Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital de esta institución en el estado de Chihuahua, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis, remitió el Acta Circunstanciada, cuyo contenido es el siguiente:

"En Ciudad Juárez, siendo las doce horas del día dos de octubre del año dos mil seis, el suscrito Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva, José Armando Esparza Avitia, procedo a desahogar las

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

diligencias mandatadas en el oficio SJGE/275/2006 del Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto, para lo cual se desarrollan las siguientes actividades:

En el recorrido que hiciera por la avenida Ejército Nacional, Avenida de la Raza, Avenida Adolfo López Mateos, Avenida Paseo Triunfo de la República y Avenida Plutarco Elías Calles; y fijando especial atención en áreas del equipamiento urbano tales como puentes, postes de energía eléctrica, postes telefónicos y semáforos; constato que sobre dichas avenidas y en tal equipamiento urbano no se encuentra ya material propagandístico (pendones) de la coalición “Alianza por México” ni de ningún otro partido o coalición. En entrevistas que realicé con vecinos y locatarios de las avenidas en que me apersoné, indagué:

Que propaganda consistente en pendones efectivamente había estado colocada sobre el equipamiento urbano en tales avenidas en los elementos urbanísticos que se citan (puentes, postes y semáforos).

Que dicha propaganda había permanecido en tales lugares desde los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta los meses de julio y agosto, sin que se pudiesen determinar períodos exactos dado que se retiraban y colocaban en diversos períodos y por diversas personas según se tratara del partido o coalición y que en la mayoría de las ocasiones permaneció al mismo tiempo una propaganda de un partido con la de otros.

Que la propaganda que miraron fue del Partido Acción Nacional, de la Coalición “Alianza por México”, y de la coalición “Por el Bien de Todos”, principalmente y que era la imagen de diversos candidatos por cada partido: desde candidatos a la Presidencia de la República a candidatos a Senadores y Diputados.

Que debido a que la propaganda era colocada de noche o muy temprano no supieron quiénes fijaron o retiraron pendones.

Dado que las personas que entrevisté proporcionaron la información que se asienta bajo la condición de no proporcionar incluso sus nombres, no fue posible ahondar más en el tema de la fijación o retiro de pendones.

Al término del recorrido y entrevistas, siendo las dieciséis horas del día de la fecha, se levanta la presente constancia en el domicilio que

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

ocupa esta 03 Junta Distrital Ejecutiva, sito en Camino Escobedo 935 esquina con Calle Plan de Ayala del Fraccionamiento Anzures de esta ciudad, misma que consta de una foja útil. Conste. Rubrica Vocal Ejecutivo 03 Junta Distrital Ejecutiva.”

XII. Por acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil ocho, se tuvo por recibido en la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral el acta circunstanciada señalada en el resultando que precede, asimismo el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tuvo por recibidas las contestaciones en tiempo y forma al emplazamiento formulado por esta autoridad a los partidos que integraron la coalición “Por el Bien de Todos”, y del Partido Acción Nacional, de igual forma el escrito de aclaración del Partido Verde Ecologista de México y en virtud del estado procesal del expediente señalado en el proemio del presente fallo, se pusieron a disposición de las partes las presentes actuaciones para que dentro del término de cinco días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, en términos de lo dispuesto por el artículo 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

XIII. A través de los oficios números SCG/474/2008, SCG/476/2008 y SCG/475/2008, se comunicó a la representación común de los partidos políticos que integraron las otroras coaliciones “Alianza por México” y “Por el Bien de Todos”, así como al Partido Acción Nacional, respectivamente, el acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil ocho, para que dentro del plazo de cinco días hábiles manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniese, mismos que les fueron notificados el día tres de abril de dos mil ocho.

XIV. Mediante proveído de fecha dos de mayo de dos mil ocho, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuvo por recibido los escritos de los representantes propietarios del Partido Revolucionario Institucional integrante de la otrora coalición “Alianza por México” y del Partido Acción Nacional, por el que desahogaron la vista ordenada por acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil ocho; perdido el derecho de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, por no haber formulado alegatos dentro del término concedido para ello y declaró cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el artículo 366, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho.

XVII. En virtud de que se ha desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en los artículos 361, párrafo 1, 364, 365 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria de fecha quince de mayo de dos mil ocho, por lo que procede resolver al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

1.- Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral es competente para resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 118, párrafo 1, inciso h) y w; 356 y 366, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, los cuales prevén que dicho órgano cuenta con facultades para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas, así como los sujetos a que se refiere el artículo 341 del mismo ordenamiento, se desarrollen con apego a la normatividad electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; asimismo, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del procedimiento que sustancia el Secretario del Consejo General y el proyecto de resolución que analiza y valora la Comisión de Quejas y Denuncias.

2.- Que toda vez que en términos de lo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se aprueba el ordenamiento legal antes citado, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es **“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”** y el principio *tempus regit actum* (que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización), el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las disposiciones aplicables al momento en que se concretaron los hechos denunciados, es decir, conforme a las normas sustantivas previstas en la legislación electoral federal vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, mientras que por lo que se refiere al procedimiento deberán aplicarse las disposiciones del código electoral vigente, ya que los derechos que otorgan las normas adjetivas se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, se antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación de ésta

(suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas), debe aplicarse la nueva ley, en razón de que no se afecta ningún derecho, según se desprende de lo dispuesto en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 1997, en la página 178, identificada con la clave I.8o.C. J/1 y cuyo rubro es **“RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES”**.

3.- Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 19 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la queja deberán ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento de la queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

En el caso en estudio, el Partido Acción Nacional y la coalición “Por el Bien de Todos” alegaron que los hechos en que se funda la queja devienen en simples manifestaciones carentes de sustento jurídico, toda vez que la coalición demandante fue omisa en aportar los medios de convicción necesarios para tener por acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las irregularidades que señalan.

Al respecto, conviene tener presente el contenido del artículo 15, párrafo 2, inciso a) y el 21 párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 10, párrafo 1, inciso a), fracción IV del mismo ordenamiento, los cuales a la letra disponen:

“Artículo 15

2. La queja o denuncia será improcedente cuando:

a) No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios en términos del artículo 10 del presente Reglamento. [...]”

En tanto que el artículo 21 del citado Reglamento establece:

“Artículo 21.

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

1. Con el escrito de queja o denuncia se ofrecerán o aportarán las pruebas o indicios con que se cuente. Cuando la Junta considere que de la relación de hechos se desprenden indicios suficientes, admitirá la queja o denuncia y procederá a emplazar al denunciado y a iniciar la investigación correspondiente.”

Atento a lo que señalan los artículos antes transcritos y del análisis del contenido del escrito de queja y de la aclaración solicitada a la quejosa, se arriba a la conclusión de que cumple con los requisitos formales para su presentación, además de que del escrito aclaratorio se desprenden los indicios necesarios y suficientes para que esta autoridad haya iniciado el procedimiento administrativo establecido en la ley, así como lo establecido en el artículo 10, párrafo 1, inciso a), del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que establecen:

a) Nombre del quejoso: en la especie, la otrora coalición “Alianza por México”, por conducto del C. Héctor Arcelus Pérez, entonces representante propietario de ese consorcio político ante el 03 Consejo Distrital de esta institución en el estado de Chihuahua, apreciándose en la última foja de la denuncia la rúbrica del mismo.

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones: en el caso concreto, el ubicado en las oficinas de la representación de ese partido, sitas en las instalaciones centrales del Instituto Federal Electoral.

c) Documentos para acreditar la personería: como ya se mencionó, en los archivos de esta institución el signante aparecía registrado como representante propietario de la coalición quejosa ante el citado órgano desconcentrado, además de reconocerle dicho carácter en el oficio 03JDE/ES/214/06, por el cual se remitió el escrito de queja atinente.

d) Acreditación de su pertenencia a los partidos políticos denunciantes: no se considera aplicable en el presente asunto.

e) Narración de los hechos denunciados: la quejosa relata las irregularidades materia de la presente queja, con mediana claridad y en forma coherente, lo cual permite a esta autoridad entrar al estudio del fondo del asunto, para determinar lo que en derecho corresponda.

f) Pruebas o indicios: del contenido del escrito de aclaración se desprenden circunstancias del lugar donde se señala que la propaganda estuvo colocada.

Por otra parte, si bien es cierto la coalición quejosa omitió aportar elementos de prueba para acreditar los hechos narrados en su denuncia, ello no constituye un impedimento para que esta autoridad haya iniciado el presente procedimiento, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento de la materia, cuando la Junta General Ejecutiva considere que de la relación de los hechos narrados en la denuncia se desprendan indicios suficientes, admitirá la queja y procederá a emplazar al denunciado y a iniciar la investigación correspondiente; hipótesis que se actualiza en el presente caso, ya que la coalición “Alianza por México” en la aclaración de la denuncia, señaló los lugares en los cuales, según su dicho, se encontraban colocados los pendones con propaganda de sus candidatos, detallando, además, que se encontraba ubicada en áreas del equipamiento urbano como son puentes, postes de energía eléctrica, postes telefónicos y semáforos, lo cual resulta suficiente para desplegar las facultades de investigación de esta autoridad.

En ese sentido, la Secretaría de la Junta General Ejecutiva procedió a radicar el curso de cuenta, mediante acuerdo de fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis, iniciándose las diligencias respectivas para el esclarecimiento de los hechos denunciados, toda vez que se agotaron los requisitos legales y reglamentarios exigidos para la admisión de la queja de cuenta.

Por tanto, es evidente que la otrora coalición “Alianza por México” señaló el lugar donde supuestamente se había colocado o fijado la propaganda electoral, con lo cual pretende acreditar los hechos denunciados, de ahí que el requisito en comento se tenga por satisfecho.

Adicionalmente, debe recordarse que el Instituto Federal Electoral cuenta con facultades para investigar los hechos denunciados, toda vez que el escrito de queja y el aclaratorio presentado por la otrora coalición “Alianza por México”, arroja elementos e indicios suficientes respecto a la probable comisión de las faltas imputadas a la otrora coalición “Por el Bien de Todos” y al Partido Acción Nacional, lo cual evidentemente obliga a esta autoridad a agotar todas las etapas del procedimiento disciplinario genérico en materia electoral, a efecto de determinar si existe o no la irregularidad de referencia, y en su caso, imponer la sanción correspondiente si se demuestra que se quebrantó el espíritu de la norma jurídica de la materia.

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

El criterio que antecede encuentra su apoyo en la tesis relevante S3EL 117/2002, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA IRREGULARIDAD. *Es incorrecto considerar que para que se inicie el procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una irregularidad o falta se ha cometido.”*

Por lo anterior, se estima que el razonamiento invocado por el Partido Acción Nacional y la otrora coalición “Por el Bien de Todos” para fundar la solicitud de improcedencia de la queja resulta inatendible.

4.- Una vez que fue desestimada la causal de improcedencia hecha valer por los denunciados y al no advertir esta autoridad la existencia de alguna otra, corresponde realizar el análisis del fondo del presente asunto, en que la otrora

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

coalición “Alianza por México” sostuvo, en lo esencial, que diversos militantes del Partido Acción Nacional como de la coalición “Por el Bien de Todos” retiraron 5000 pendones que había colocado con propaganda electoral de los candidatos postulados a los cargos de Presidente de la República y al Senado, y en su lugar colocaron pendones con propaganda electoral del partido y coalición denunciados.

En relación con los hechos que se le imputan, el Partido Acción Nacional, al dar contestación al emplazamiento que le fue formulado, expresó lo siguiente:

- Que en el escrito de queja jamás se precisó que militantes de ese partido hayan quitado o retirado propaganda electoral de la coalición denunciante, además, jamás refiere que dichos individuos portaran o vistieran indumentaria con logotipos o algún otro distintivo que permitiera relacionarlos con tal o cual partido o coalición.
- Discrepa de la aseveración manifestada en el escrito de queja en el punto III, en virtud de que no se proporcionan los elementos necesarios para identificar a dicha cuadrilla de personas como simpatizantes o militantes de ese partido.
- Finalmente sostiene que la manifestación realizada por el quejoso en su escrito de aclaración, es falsa, porque no se aportaron los elementos necesarios para acreditar las circunstancias del lugar donde se encontraba colocada la propaganda, a las personas que supuestamente la retiraron y posteriormente la falta de la misma, considerando que quizás personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales la haya retirado, en virtud de obstruir los señalamientos viales sobre los cuales se encuentran colocados.

Por su parte, la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, al contestar el emplazamiento que le fue formulado, manifestó lo siguiente:

- Que la coalición quejosa se abstiene de presentar prueba alguna, pues considera erróneo su dicho para acreditar la supuesta violación, además de no señalar el presupuesto legal que se ha violado, de igual forma, del escrito inicial de queja y del aclaratorio no se desprende afirmación alguna en contra de la coalición “Por el Bien de Todos”.

Como puede observarse, la litis en el presente asunto se constriñe a determinar si como lo afirma la otrora coalición “Alianza por México”, existió la propaganda electoral colgada en los lugares que menciona, y si el Partido Acción Nacional y la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, retiraron dicha propaganda, y en su lugar colocaron propaganda de sus candidatos, conductas que, de comprobarse,

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

podrían ser violatorias del artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5.- Que previo a la resolución del fondo del asunto, conviene realizar algunas consideraciones de orden general relacionadas con la propaganda que puede ser emitida por los partidos políticos o las coaliciones.

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, siendo el medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida política del mismo.

Al efecto, debe recordarse que esta autoridad, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha señalado que los partidos políticos deben desarrollar **actividades políticas permanentes**, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de buscar incrementar el número de sus afiliados, así como **actividades específicas de carácter político-electoral**, que desarrollan durante los procesos electorales y tienen como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y la obtención del voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus **candidatos registrados** obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas.

Por **actividades políticas permanentes**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquéllas tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente a los periodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente que de ser así, restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera permanente.

Por cuanto a las **actividades político-electorales** que se desarrollan durante los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

ideas que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, hasta la realización de actos tendentes a obtener el triunfo en la elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos electorales.

Por su parte, **la campaña electoral**, en la legislación federal, se define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182, párrafo 2, del código electoral federal, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad con el párrafo 3, del mismo artículo, por **propaganda electoral** debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, **proyecciones** y **expresiones** que durante la campaña electoral producen y **difunden** los **partidos políticos**, los **candidatos registrados** y sus simpatizantes, con el propósito de **presentar** ante la **ciudadanía las candidaturas registradas**.

Como se puede apreciar, los actos de campaña y la propaganda electoral, aunque tienen diferencias sustanciales, se encuentran comprendidos dentro del concepto de **campaña electoral**, ya que esta última abarca el conjunto de actividades que se llevan a cabo para la obtención del voto (reuniones públicas, asambleas, marchas o escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, etc.). Por lo tanto, podemos afirmar que la campaña electoral se manifiesta a través de los actos de campaña y la propaganda electoral.

El párrafo 4 del artículo 182 del ordenamiento en cuestión, prevé que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección hubieren registrado.

Asimismo, debe señalarse que los artículos 185, párrafo 2; y 186, párrafos 1 y 2 del código electoral federal, establecen que la propaganda electoral debe respetar los límites establecidos en los artículos 6º y 7º de la Ley Fundamental, absteniéndose de incluir cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros; debiendo también ponderar la vida privada de las personas y los valores democráticos.

Por su parte, el artículo 190, párrafo 1, del código electoral federal, establece el periodo de tiempo en que deben llevarse a cabo las campañas electorales de los partidos políticos, al señalar que éstas se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, y concluirán tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

Así, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, reglamenta lo relativo a las campañas electorales, destacando las siguientes disposiciones:

“ARTÍCULO 48

(...)

9. En uso de los tiempos contratados por los partidos políticos en los términos de este Código en los medios de cobertura local, los mensajes alusivos a sus candidatos a Presidente, diputados y senadores, sólo podrán transmitirse durante los períodos de campaña a que se refiere el artículo 190, párrafo 1, de este Código.

(...)

ARTÍCULO 182

1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

ARTÍCULO 183

1. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente.

2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los partidos políticos o candidatos el uso de locales cerrados de propiedad pública, deberán estarse a lo siguiente:

a) Las autoridades federales, estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos que participen en la elección; y

b) Los partidos políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.

3. El Presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter.

ARTÍCULO 184

1. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una

interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer conocer a la autoridad competente su itinerario a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.

ARTÍCULO 185

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.

ARTÍCULO 186

1. La propaganda que en el curso de una campaña difundan los partidos políticos a través de la radio y la televisión, comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia les confiere el presente Código, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución.

2. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que realicen propaganda electoral a través de la radio y la televisión deberán evitar en ella cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros.

3. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, podrán ejercer el derecho de aclaración respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades o atributos personales. Este derecho se ejercitará, sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

ARTÍCULO 187

1. La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones administrativas expedidas en materia de prevención de la contaminación por ruido.

ARTÍCULO 188

1. Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo.

ARTÍCULO 189

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen las Juntas Locales y Locales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos.

2. Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los ayuntamientos, gobiernos locales y del Distrito Federal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento

acordado en la sesión del Consejo respectivo, que celebren en el mes de enero del año de la elección.

3. Los Consejos Locales y Locales, dentro del ámbito de su competencia velarán por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia.

ARTÍCULO 190

1. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

2. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

...

ARTÍCULO 191

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancionada en los términos de este Código.”

De los dispositivos transcritos, se obtiene el marco legal que regula las actividades que despliegan los partidos políticos con el objeto de promover y difundir entre la ciudadanía sus propuestas y candidaturas, a fin de verse beneficiados con la expresión del voto en su favor durante los procesos electorales.

6.- Que una vez establecidas las consideraciones antes esgrimidas, resulta procedente entrar al fondo del asunto que se resuelve.

Lo anterior resulta relevante para la resolución del asunto que nos ocupa, en virtud de que la precisión y claridad en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, constituyen condiciones indispensables para el despliegue de las facultades con que cuenta esta autoridad en el esclarecimiento de los asuntos que son sometidos a su consideración.

En el escrito de queja y particularmente del escrito aclaratorio, la denunciante expresó el lugar donde supuestamente se encontraban colocados los pendones

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

con la propaganda en cuestión, los cuales a su decir constituyen el motivo de agravio por el que ocurrió en la presente vía, y que son del tenor siguiente:

*“...**PRIMERO.-** Que por lo que hace a las circunstancias de "modo", las mismas se encuentran plenamente acreditadas en el escrito de Queja, presentado por el C. **HÉCTOR ARCELUS PÉREZ**, representante de la Coalición "Alianza por México" ante el Consejo Distrital Electoral 03, en el estado de Chihuahua, toda vez que este se hace consistir en la conducta ilegal que diversos militantes tanto del Partido Acción Nacional como de la Alianza "Por el Bien de Todos" llevaron a cabo el retiro de Propaganda electoral de los candidatos postuladas por mi representada a los cargos de Presidente de la República y al Senado de la República, colocando pendones y propaganda electoral del partido y coalición denunciados, en los lugares que se encontraba colocada la propaganda electoral de mi representada.*

***SEGUNDO.-** Por lo que establece a la circunstancia de "tiempo", manifestada esta situación se da desde el día 25 de abril hasta el día previo a la celebración de la jornada electoral, y en tales circunstancias estamos en presencia de hechos de "tracto sucesivo", lo cual establece que la denuncia de estos hechos no puede establecerse únicamente en días específicos, ya que los mismos continuaban realizándose durante el lapso de tiempo manifestado, circunstancia que permite acreditar en forma reiterada la violación que a la normatividad electoral realizan los militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional y la Coalición "Por el Bien de Todos" que a través de la promoción ilegal de sus candidatos y de esta manera realizando una violación a la normatividad electoral.*

***TERCERO.-** En cuanto, lo relativo a la circunstancia de "lugar", se hace el señalamiento respectivo a que los actos denunciados acontecieron, en las principales vialidades que se encuentran dentro de la demarcación del Distrito Electoral 03, con cabecera, en el municipio de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, entre otras, la Avenida Ejército Nacional, Avenida de la Raza, Avenida Adolfo López Mateos, Avenida Paseo Triunfo de la República y Avenida Plutarco Elías Calles, es decir, a todo lo largo de estas avenidas...”*

Bajo esta premisa, con la finalidad de acreditar la existencia de los hechos antes referidos, la autoridad de conocimiento, en uso de sus facultades investigadoras, determinó desarrollar una investigación con el fin de allegarse directamente de los

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

elementos necesarios que demostraran las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos objeto de la litis.

Del acta transcrita anteriormente en el resultando XI de esta resolución, el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del 03 Distrito Electoral de esta Institución en el estado de Chihuahua, se desprende lo siguiente:

- a) Que realizó un recorrido por los lugares señalados en el escrito de aclaración de queja, constatando que no se encontraba material propagandístico (pendones) de la coalición “Alianza por México” ni de ningún otro partido o coalición.
- b) Que de las testimoniales recabadas, los ciudadanos (vecinos y locatarios) entrevistados manifestaron haber visto colocada propaganda en puentes, postes y semáforos, ubicados en las avenidas indicadas en el escrito aclaratorio.
- c) Que la propaganda había permanecido durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta los meses de julio y agosto, la cual era alusiva a los candidatos a Presidente de la República, a Senadores y Diputados, del Partido Acción Nacional, de las coaliciones “Alianza por México” y “Por el Bien de Todos”.
- d) Que no supieron quiénes fijaron o retiraron los pendones con la propaganda.
- e) Que de los ciudadanos entrevistados, ninguno quiso proporcionar sus nombres e identificarse.

El acta circunstanciada en comento reviste el carácter de documento público, cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 28, párrafo 1, inciso a), 35, párrafos 1 y 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que a letra establecen:

“Artículo 28

1. Serán documentales públicas:

- a) Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;*

(...)

Artículo 35

1. Las pruebas admitidas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

2. Las documentales públicas tendrán pleno valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran...”

Los resultados de la inspección realizada por esta autoridad, demuestran que la presunta propaganda materia del presente procedimiento, al menos el día en que se llevó a cabo la referida indagatoria, ya no se encontraba en el lugar que, de acuerdo a las circunstancias de lugar narradas por la quejosa, eran los sitios en los que aparentemente se ubicaba.

Adicionalmente, el responsable de la diligencia hizo constar las declaraciones precedentes, de las que se desprenden que dichos ciudadanos no supieron quienes fijaron o retiraron la propaganda denunciada.

En ese tenor, la autoridad de conocimiento advierte que si bien los hechos en cuestión pudieron haber sido comprobados de manera directa por los declarantes, lo cierto es que los mismos no se identificaron (lo cual resta valor a sus manifestaciones), además de que tampoco precisaron con claridad las circunstancias de modo, en concreto, la fijación o retiro de los pendones con la propaganda denunciada; consecuentemente, la diligencia en cuestión no arroja evidencia o información que genere certeza absoluta sobre la existencia de los mismos al no conocer las características de quien pudo haber realizado los actos antes mencionados.

En este orden de ideas, conviene decir que el órgano resolutor se encuentra obligado a efectuar una valoración integral de las constancias que obran en autos, así como de los elementos de convicción de que se allegue, pues se trata de elementos aislados, de cuya correcta concatenación, se posibilita el conocimiento de un hecho incierto, sin embargo, cuando de dichos elementos no se logra formar una cadena que permita tener certeza sobre la realización de un determinado acontecimiento, su fuerza probatoria es ineficaz, máxime cuando se trata de pruebas que no se encuentran administradas con otros medios de convicción,

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

situación que se actualiza en el caso que nos ocupa, pues la quejosa no ofreció ninguna.

En tal virtud, esta autoridad no cuenta con los elementos que le permitieran arribar a la convicción de que efectivamente militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional y de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, hayan retirado los pendones con la propaganda de la coalición “Alianza por México” y en su lugar hayan colocado la de sus partidos o coaliciones.

En efecto, si bien se cuenta con los indicios de las manifestaciones de los ciudadanos entrevistados en la diligencia levantada el dos de octubre de dos mil seis, mediante el acta circunstanciada antes referida, también es cierto que la cadena de indicios se detiene en este dato concreto, y por lo tanto no puede afirmarse válidamente que militantes o simpatizantes de los demandados hayan precedido al retiro de la propaganda mencionada en la queja.

En ese sentido, de las constancias probatorias que obran en el expediente, esta autoridad advierte la carencia de elementos suficientes para tener por acreditada la existencia y retiro de dicha propaganda.

Lo anterior, porque con relación a los testimonios de los ciudadanos entrevistados, quienes no se identificaron, es menester señalar que los mismos no reúnen los requisitos necesarios para ser considerados válidos.

Al efecto, constituye un principio general del Derecho Probatorio, que para la validez de un testimonio, se deben agotar diversos requisitos. En la especie, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-116/2006, afirmó que las declaraciones rendidas por testigos ante autoridades electorales, deben satisfacer varias exigencias, entre ellas, que quienes las formulen acrediten plenamente su identidad, y mencionen las circunstancias por las cuales les constan los hechos (lo que jurídicamente se conoce como la razón de su dicho).

En esta tesitura, toda vez que la coalición accionante fue omisa en aportar mayores elementos probatorios para acreditar los extremos de sus pretensiones, y las diligencias practicadas tampoco los demostraron, no es posible determinar la comisión de la falta administrativa imputada.

En consecuencia, toda vez que la autoridad de conocimiento no puede constatar que exista una violación a la legislación electoral federal, ya que de la valoración de la investigación realizada, no se desprenden elementos suficientes que nos permitan afirmar la existencia de la propaganda colgada y el retiro de la misma por

militantes o simpatizantes de las partes demandadas, resulta aplicable a favor de los denunciados el principio “*in dubio pro reo*”.

El principio “*in dubio pro reo*” ha sido conceptualizado como el privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de “*presunción de inocencia*” que rige la doctrina penal, al no ser aplicable una sanción a aquél presunto responsable en el que del procedimiento incoado en su contra las pruebas existentes no puedan constituir prueba plena, por lo que el juzgador debe absolver al indiciado al no tener la plena certeza de que dicho sujeto incurrió en la falta que se le imputa.

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente Jurisprudencia:

“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo “*in dubio pro reo*” no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Parte: 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.”

Asimismo, también sirve como sustento de la aplicabilidad del principio “*in dubio pro reo*” dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:

“DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACION DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico *in dubio pro reo*.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.”

Asimismo, resultan aplicables los siguientes criterios, sustentados por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa

que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima.

Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 483-485, tesis S3EL 045/2002.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—*De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que*

acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción Nacional.—26 de abril de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—Partido Alianza Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 790-791, tesis S3EL 059/2001.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—*La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a*

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.

Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005.”

Cabe advertir, que el principio “*in dubio pro reo*”, es un beneficio para el sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si dentro del estudio del presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QAPM/JD03/CHIH/275/2006

autoridad siguiendo los principios que rigen el “*ius puniendi*” se encuentra imposibilitada para emitir una resolución condenatoria.

El principio de presunción de inocencia exige que el Estado para poder condenar a un individuo, deba reunir los elementos de prueba suficientes que demuestren el hecho atribuido al acusado y su participación en aquél.

En este orden de ideas, el principio “*in dubio pro reo*”, en sentido negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se procesa a un individuo.

Asimismo, el principio “*in dubio pro reo*” actúa en la valoración de la prueba al momento de que el órgano emita la resolución o sentencia correspondiente, exigiendo que dichos elementos probatorios conlleven a la certeza sobre la verdad de la imputación como presupuesto para que dicha resolución sea condenatoria.

Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que del análisis integral realizado a las constancias que obran en el expediente, esta autoridad no encuentra elementos suficientes que acrediten la existencia o vigencia de los hechos denunciados, no es posible determinar que el partido y la coalición denunciados cometieron alguna infracción a la normatividad electoral.

En tal virtud, es posible concluir que no existen elementos suficientes para acreditar que el Partido Acción Nacional y la otrora coalición “Por el Bien de Todos” incumplieron con la obligación prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al no acreditarse la colocación de la propaganda señalada por el denunciante, así como el retiro de la misma por los denunciados.

En mérito de lo antes expuesto, se propone declarar **infundada** la presente queja.

7.- En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; **109, párrafo 1 y 366, párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), w) y z) del ordenamiento legal en cita**, este Consejo General emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO.- Se declarar **infundada** la queja presentada por la otrora coalición “Alianza por México” en contra del Partido Acción Nacional y la entonces coalición “Por el Bien de Todos”.

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente la presente resolución.

TERCERO.- En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 23 de mayo de dos mil ocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales Maestro Andrés Albo Márquez, Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Maestra María Teresa de Jesús González Luna Corvera, Maestra María Lourdes del Refugio López Flores, Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL**

**EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CÍVICA Y ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA**

**DR. LEONARDO VALDÉS
ZURITA**

**MTRO. HUGO ALEJANDRO CONCHA
CANTÚ**

De conformidad en lo dispuesto por los artículos 115, párrafo 2 y 125, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 16, párrafo 2, inciso c) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral y 16, párrafo 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo General.